

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 176/15  
\*H103024291166\*  
H103024291166

**JUICIO: FLORES ALBERTO FABIAN c/ FOREIGN SRL s/ COBRO DE PESOS.  
EXPEDIENTE NRO. 176/15.**

San Miguel de Tucumán, 09 marzo de 2023.

**AUTOS Y VISTOS:** Para dictar sentencia definitiva en los autos “*FLORES ALBERTO FABIAN c/ FOREIGN SRL s/ COBRO DE PESOS*”, que tramitan por ante este Juzgado del Trabajo de la IIª Nominación, de donde

### **RESULTA**

**DEMANDA:** A fojas 39/48 se apersonó el letrado Franco G. Medina, adjuntando Poder Ad-Litem (foja 04) para actuar en nombre y representación del actor: Fabián Alberto Flores, DNI 23.826.703, con domicilio en calle Aniceto de la Torre nro. 1100, El Manantial, Tucumán.

La parte actora inició demanda por cobro de pesos en contra de FOREIGN SRL, CUIT 30-70861826-4, por la suma de \$58.663,78 en concepto de indemnización por antigüedad (art. 245 LCT), preaviso (art. 231 LCT y SAC s/preaviso omitido. En cuanto al cálculo de los intereses a aplicar a los créditos, solicitó que se aplique la tasa que se adecue al incremento experimentado por la canasta alimentaria, atento al deterioro que importa la aplicación de la tasa pasiva. En su defecto, dejó planteada la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificados por los arts. 4 de la ley 25561 y art. 5 del decreto nro. 214/02 que prohíbe la indexación de los créditos.

Afirmó la parte actora que fue empleado temporario de carácter permanente discontinuo de la empresa FOREIGN SRL, dedicada a la actividad agraria cítrícolas -fundamentalmente limonera-, al servicio de cosecha mecánica, siendo su ingreso real el 16/05/1998 en la empresa CORPAP SRL -CUIT 30-69173958-5, actualmente inactiva- hasta que el 15/03/2005, ésta última empresa lo traspasó a la primera -FOREIN SRL- con la misma categoría y funciones laborales: embalador parking (embalador de carga y descarga), pero en realidad CORPAP se cambió de nombre por FOREIGN SRL, llamándose antes de otras formas: COOTRACNOR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.; ello, según los dichos del actor, con un claro abuso de figuras societarias con fines, tal vez, de negarle

legitimación activa. Aclaró que en caso de la demandada no cumpla con el pago de las indemnizaciones, solicitará la extensión de responsabilidad en forma ilimitada y solidaria de sus socios.

Indicó que, conforme el CCT que rige la actividad, sus recibos de haberes y el certificado de trabajo entregado a él, la antigüedad fue reconocida oportunamente por la demandada.

Afirmó que en el año 2013, cuando logró reunión la documentación solicitada para el ingreso a trabajaba para la nueva temporada, la demandada procedió a despedirlo el 07/03/2013.

Expresó que, pese al reconocimiento de su antigüedad, al confeccionarse el recibo de liquidación de haberes por despido, en un obrar ilegítimo, la demandada tomó como base de la liquidación solamente los últimos 8 años trabajados, abonando -solamente- por todo concepto la suma de \$52.300. Que por esta acción reclama el pago de las diferencias indemnizatorias, conforme planilla que confeccionó a foja 48.

Transcribió el intercambio epistolar que habría sucedido entre las partes. Luego, señaló que hubo fraude a la ley por la demandada, que vulneró sus derechos con la finalidad de evadir las responsabilidades de ley.

**CONTESTACION DE DEMANDA:** Corrido el traslado de ley, a fojas 62/66, se apersonó el demandado con el letrado apoderado: Vicente Bellomio, conforme poder adjunto a fojas 59/61.

La accionada contestó demanda y realizó una negativa general y particular de los hechos invocados por la parte actora. Asimismo, negó la toda la documentación acompañada por el actor.

Al dar su versión de los hechos, la parte demandada indicó que el actor comenzó a trabajar para ella el 16/05/1998, conforme recibo de haberes adjuntados, conforme transferencia de su contrato de trabajo permanente discontinuo; que se desempeñaba como trabajador de temporada, bajo la categoría de embalador y que trabajó hasta el año 2013. Invocó los arts. 96/98 de la LCT.

Expresó que el 07/03/2013 procedió a despedir al actor, notificándolo mediante CD, poniendo a su disposición su liquidación final e indemnizaciones pertinentes. Indicó que ese mismo día se le pagó la suma de \$52.300, liquidación efectuada conforme a derecho y que el accionante la recibió de conformidad.

Transcribió el intercambio epistolar que habría sucedido entre las partes.

Impugnó la planilla de rubros e importes reclamados; señaló que no existe sustento que justifique tomar \$6463,91 como base de cálculo indemnizatorio.

**APERTURA A PRUEBA:** La causa fue abierta a prueba a foja 81, habiendo ambas partes ofrecido distintos medios probatorios.

**APERSONAMIENTO:** el letrado Bellomio renunció al poder conferido a foja 78 y a foja 94 se tuvo por apersonada a la letrada Graciela Corai por la demandada, conforme poder de foja 86.

A foja 107 se tuvo por apersonado al letrado Ezequiel Giudice por la demandada, conforme poder de foja 102.

**APERCIBIMIENTO ART. 22 CPL:** a foja 128 el letrado Giudice informó que le fue revocado el poder conferido. La demandada fue notificada a foja 134 en su nuevo domicilio real, conforme decreto de foja 129, para que se apersone a estar a derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 22 del CPL. Como no lo hizo, a foja 136 se hizo efectivo el apercibimiento mencionado, el que fue notificado a la accionada a foja 137.

**AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 69 DEL CPL:** a foja 176 se fijó fecha de audiencia de conciliación, habiendo sido notificadas las partes, comparecieron la parte actora con su letrado. No lo hizo la demandada.

**INFORME AL ACTUARIO:** El actuario informó a foja 179 el actuario informó que las partes no ofrecieron prueba.

**AUTOS PARA SENTENCIA:** En mérito a ello, quedan los presentes autos en condiciones de ser resueltos.

### **CONSIDERANDO:**

#### **I. ACLARACION PRELIMINAR:**

Antes de ingresar al examen resolución de la presente sentencia de fondo, debo puntualizar que todo el trámite de la esta controversia fue sustanciado por las normas del CPL y con la aplicación supletoria de la ley 6176 y sus modificatorias. Por lo tanto, lo primero que debo puntualizar es que por imperio de lo normado en el Art. 822 CPCCT de la ley 9531 y sus modificatorias, la presente sentencia será resuelta conforme a la normativa anterior; es decir, el CPL y con la aplicación supletoria de la ley 6176 y sus modificatorias; por cuanto se trata de una juicio íntegramente sustanciado a la luz de los mencionados digestos normativos y se encuentra solamente pendiente el dictado de la sentencia; razón por la cual, corresponde dictar resolución aplicando el articulado de los mismos.

**II. CUESTIONES RECONOCIDAS:** De los términos de la demanda y de su contestación, surgen como hechos reconocidos -tácita o expresamente-: **(i)** que la accionada se dedica a la actividad agraria citrícola, fundamentalmente, limonera; **(ii)** la existencia de un contrato de trabajo de temporada con prestaciones discontinuas entre las partes litigantes desde el **15/03/2005**; **(iii)** la demandada reconoció la antigüedad del actor en el empleo desde el: **16/05/1998**; **(iv)** que el trabajador tenía la categoría de embalador packing; **(v)** que la relación de trabajo se extinguió antes de que inicie la temporada del 2013, por **despido directo** sin causa comunicado mediante CD de fecha de imposición **07/03/13**, y por no constar prueba informativa al correo, **ésta es la fecha del distracto**; **(vi)** que la demandada le abonó al accionante la suma de \$52.300.

**III. CUESTIONES CONTROVERTIDAS O DE JUSTIFICACIÓN NECESARIA:** En virtud de todo lo expresado precedentemente y encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, entiende este sentenciante que corresponde determinar cómo puntos contradictorios a tratar a aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica de autos y poder así llegar a dilucidar la verdad objetiva del caso, encuadrando los supuestos probados dentro de las normas aplicables al caso concreto.

Las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme, conforme el artículo 265, inciso 5, del CPCCT (supletorio) son las siguientes:

1. El cómputo de la antigüedad en el contrato de temporada;
2. Procedencia de los rubros reclamados;
3. Intereses, costas, planilla y honorarios.

**IV. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LABORAL:**

**IV.1** A foja 53 consta agregada a la causa el decreto por el cual se tuvo por adjunta la documentación original acompañada por la parte actora.

**IV.2.** a foja 76 consta el decreto por el cual se tuvo por adjuntada la documentación original acompañada por la demandada.

La demandada al contestar demanda no realizó una puntual, precisa y categórica impugnación de los documentos adjuntados por la accionada que le atribuye a ella.

La parte actora ha concurrido a la audiencia de

conciliación del art. 69 del CPL y no ha impugnado la documentación laboral presentada por la demandada que se le atribuye.

**IV.3.** En relación a esta cuestión, cabe destacar que nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado que: “El art. 88 del CPL dispone que “Las partes deberán reconocer o negar categóricamente los documentos que se les atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas y facsímiles que les hubieran dirigido. El incumplimiento de esta norma determinará que se tenga por reconocidos o recibidos tales documentos”. En su responde, bajo el punto “III.i. Negativa Genérica”, la accionada sostuvo: “En forma genérica niego todos y cada uno de los hechos, derecho y documentación adjuntada por la actora que no sean objeto de un reconocimiento expreso en este responde” (cfr. fs. 334 vta.). Esta Corte tiene dicho que: “La frase 'niego la autenticidad de [los] papeles que acompañan la demanda' no pone en duda la documentación presentada por la actora puesto que [...] la genérica declaración del demandado no cumple con el requisito de precisión exigido por el art. 88 del CPL” (CSJTuc.; “Posse Aída Elizabeth vs. Ru-Mar Turismo y Otro s/ Cobros”; sentencia N° 318 del 04-5-2000); y que “En su responde, el accionado niega, en forma genérica, 'toda validez probatoria y autenticidad a la documentación acompañada por el actor con su demanda'. Por imperio del artículo 299, inciso 2°, primer párrafo, 'in fine' del C.P.C. y C. -de aplicación supletoria al fuero laboral-, el silencio, las respuestas evasivas o ambiguas, o la negativa meramente general en el responde, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de esos hechos y, respecto de los documentos, se tendrán por auténticos los mismos. Se subrayan los verbos, 'podrán' y 'tendrán', utilizados por la disposición legal, para destacar que en el caso de los hechos, es facultad del tribunal estimarlos como reconocidos, mientras que respecto a los documentos, el mandato legal es imperativo y si no se niega concreta y puntualmente, se los debe tener por auténticos” (CSJTuc., “Tula Domingo Venancio vs. Transporte Miglio S.A. s/ Cobro de Pesos”, sentencia N° 219 del 31-3-1999). Se advierte entonces que, conforme al criterio sentado en los precedentes citados, la genérica declaración de la demandada “niego todos y cada uno de los hechos, derecho y documentación adjuntada por la actora” no cumple con el requisito de negativa categórica que impone el art. 88 del CPL.”. (Sala Laboral y Contencioso Administrativo, sentencias 544 del 09/05/17 y 318 del 04/05/2000).

Es decir, la norma -respecto de la prueba instrumental “laboral” que se atribuye a la contraria- resulta concluyente en cuanto al “*deber de negar o impugnar la autenticidad en forma categórica*” y, frente a la omisión de hacerlo, ya sea por no cumplir la carga al contestar o, por incontestar la demanda; o bien, para el caso de la parte actora en el marco de la audiencia del artículo 71, conforme el artículo 88, inc. 2 del CPL. En tales casos debe tenerse al documento (o

a los instrumentos) “por reconocidos”, siempre que se trate de documentos que se atribuyen a la contraria; o bien: por “recibidos” (los telegramas o cartas atribuidos a la contraria) por imperio de la ley. Ello, insisto, porque la propia ley procesal lo dice en forma clara, categórica y aseverativa (“...determinará que se tenga por reconocido o recibidos tales documentos”, art. 88, 1er. párrafo, del CPL).

Consiguientemente de lo anterior, por no haber la parte demandada, ni la parte actora, realizado en la etapa procesal oportuna una negativa categórica o impugnación detallada de la documentación laboral, se debe tener “**por reconocidos**” los instrumentos que cada parte litigante le atribuye a la otra, y por recepcionadas y/o remitidas las misivas que acompañó cada una y que tuvo por destinatario o remitente a la otra. Así lo declaro.

**IV.4.** Se aclara que el apercibimiento aplicado solo cabe acerca de la documentación laboral que las partes acompañaron al proceso como emanadas, remitidas y/o recepcionadas **por la contraria**; no alcanzado esta declaración a lo que es la documentación que se atribuye a terceros; pues para poder valorar la documentación emanada de terceros debe estarse a lo dispuesto en el art. 337 del CPCCT.

## **V. ANALISIS DE LA CUESTION Y VALORACION DE LAS PRUEBAS.**

Antes de ingresar al tratamiento puntual de las cuestiones mencionadas, considero importante mencionar que cuando corresponda ingresar al examen, ponderación y valoración de las pruebas, lo haré siguiendo las líneas directrices trazadas por el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido que - como principio- *los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las cuestiones que proponen a su consideración, ni a tratar una por una todas las pruebas ofrecidas y producidas, sino tan solo deben analizar y ponderar las cuestiones y pruebas que consideren relevantes o conducentes para la decisión del caso corresponde proceder al análisis de las pruebas presentadas por las partes, recordando que por el principio o juicio de relevancia puede el Jurisdicente considerar sólo aquellas pruebas que tengan relevancia para la solución del litigio* (CSJN, in re: “Benítez, Dermidio c/ Compañía Sansinena S.A.”; “Damiani, César M. c/ Rapaport, Samuel”; “Fernández, González y Tacconi, S.R.L. c/ Madinco S.R.L.”; Torulice o Tortolice, Francisco c/ Blass del Yesso, Domingo”, entre otros, años 1964 publicada en Fallos: 258:304).

Este mismo criterio fue reiterado y ampliado en numerosos pronunciamientos posteriores (y aún está plenamente vigente), y deja muy en claro que: “...*los jueces del caso no están obligados a ponderar una por una*

*y exhaustivamente todas las pruebas agregadas, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni a tratar todas las cuestiones expuestas y examinar los argumentos que, en su parecer, no sean decisivos...”* (CSJN - in re: “Ogando, Adolfo -Suc.- c/ Barrenechea, María”, 24/03/1977, Fallos: 297:222; “Traiber c/ Club Atlético River Plate” del 04/07/2003, Fallos: 326:2235, entre muchos otros).

Corresponde entonces, verificar y examinar además de las cuestiones propuestas, el plexo probatorio rendido en autos, para luego ingresar a ponderar y valorar las pruebas que considero conducentes para la resolución del caso. La plataforma probatoria común a todas las cuestiones, obrante en autos, es la siguiente:

**VI. PRIMERA CUESTION:** el cómputo de la antigüedad en el contrato de temporada.

VI.1. De manera preliminar, debo recordar que las partes han coincidido en que la accionada se dedica a la actividad agraria citrícola, fundamentalmente, limonera y que el contrato de trabajo que los unió era uno permanente, de prestaciones discontinuas. Por último, que la demandada expresamente le reconoció la antigüedad en el empleo a la accionante desde el 16/05/1998, con fecha de ingreso para la accionada desde el 15/03/2005 (esto último, tácitamente, porque solo dijo que en el año 2005 el trabajador ingresó a trabajar para ella). Pero, además, ello luce corroborado con los recibos de sueldo (fojas 18/38); la certificación de servicios y remuneraciones (fojas 12/17) y en el recibo de pago de indemnización por antigüedad (foja 07), adjuntados por el propio actor a la causa.

VI.2. Por otro lado, las partes han coincidido en que **el contrato de temporada se extinguió antes de que inicie la temporada del 2013: el 07/03/2013**, por despido directo sin causa.

VI.3. Ahora bien, es necesario destacar que la nota típica del contrato de temporada **es ser indeterminado y permanente, pero con prestaciones discontinuas porque se alternan periodos de actividad con periodos de receso** que están sujetos a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad y no de la voluntad del empleador. Es decir, el contrato de temporada **no se extingue al finalizar el ciclo de prestación (no tiene vencimiento) ya que es un contrato permanente de prestaciones discontinuas (art. 96 a 98 de la LCT).**

La doctrina es conteste en afirmar que el trabajo de temporada está caracterizado por la naturaleza de la actividad económica de la

empresa y debe responder por las necesidades propias de ésta, surgiendo los mismos derechos que tienen los trabajadores de prestación continua; y que, a partir de la primera contratación nacen obligaciones para ambas partes: para el empleador de reservar el empleo para el ciclo siguiente y la del trabajador de presentarse a trabajar cuando el ciclo se inicie.

El carácter permanente del contrato -aun cuando las prestaciones del trabajador hayan sido discontinuas- excluye que este se extinga al finalizar cada temporada, manteniéndose latente y presto a iniciarse al comienzo de la nueva temporada (CSJT, Sala Laboral y Contencioso Administrativa; "Roldán, Carlos Alberto vs. Las Pirguas SRL y/o s/ despido"; sentencia n.º 863, 18/11/2011).

En esta misma línea de ideas vale la pena recordar el criterio de la Cámara Laboral, Sala 4ª, que en esencia comparto, donde se ha considerado que: ***“El contrato de trabajo de temporada es un vínculo permanente que asegura el derecho a la estabilidad de los trabajadores que se presentan para retomar las tareas al comienzo de cada ciclo de la actividad (Art. 96 LCT). El dependiente tiene derecho a ocupar su puesto de trabajo en la temporada siguiente a aquélla en que inició sus actividades y así sucesivamente hasta que el contrato se extinga por alguna de las causales previstas para el contrato por tiempo indeterminado. Por lo tanto, desde el momento mismo de la primera contratación, el vínculo entre A. F. M. y F. S.R.L., adquirió permanencia y el trabajador obtuvo el derecho a la estabilidad que la ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua desde la primera temporada”*** (DRES.: CASTILLO - AVILA CARVAJAL - Sentencia 202 el 29/06/18, in re: “MORALES ALCIDES FERNANDO Vs. S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. S/ INDEMNIZACIONES”).

Estas conclusiones derivan del segundo párrafo del art. 97 de la LCT en cuanto equipara el contrato de temporada con prestaciones discontinuas a las contrataciones permanentes, y frente a lo cual aquel trabajador adquiere estabilidad en el empleo desde la primera temporada de trabajo para la que fue contratado. La norma dispone que: ***“El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo”***.

A su vez, por las propias y específicas características de **este tipo de contrato de trabajo, el que se dijo: es permanente e**



indeterminado, y frente a lo cual el trabajador adquiere así estabilidad laboral desde el primer día de trabajo.

VI.4. Ahora bien, en relación a la antigüedad en el empleo en esta modalidad de contratación, es importante resaltar que más allá de la nota de permanencia que tiene el contrato de temporada con prestaciones discontinuas, **es aplicable el art. 18 de la LCT en cuanto establece que la antigüedad se computa desde el inicio de la primera contratación y en función de los períodos efectivamente trabajados en el transcurso de la relación laboral**. En tal sentido v. Derecho del Trabajo comentado; director Miguel Ángel Piroló; La Ley, 2017, 2 edición; tomo I; Sección II - Actividad Agraria, por Marcelo Claudio Fernández.

A su vez, es muy importante tener en cuenta a los efectos del cómputo de la antigüedad del trabajador en el contrato de trabajo de temporada, **el tiempo vacío que corresponde a los plazos de receso que no se computan a los efectos de la antigüedad porque durante el período de receso el vínculo subsiste, pero las prestaciones se suspenden; en especial, las correlativas de prestación del servicio y el pago de la remuneración, siendo de aplicación el artículo 18 de la LCT**, el que dispone: “*se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación*”. En concreto, **sólo será computable el tiempo de prestación efectiva la de efectivo trabajo**, en contraposición a lo que serían los plazos de receso que no se computan.

VI.5. En ese orden de ideas, a los fines de calcular la antigüedad del actor-trabajador, es decir, las temporadas que efectivamente trabajó el accionante, debo tener presente que esta fuera de debate que la antigüedad en el empleo del accionante fue desde el **16/05/1998** y la fecha de ingreso para la demandada fue el **15/03/2005**; y que el distracto se produjo el **07/03/13**.

Ahora bien, como se dijo, para calcular el cómputo de la antigüedad del actor (conf. art. 18 LCT), se debe determinar **cuántos periodos efectivamente trabajó aquel en ese lapso de tiempo 16/05/1998 al 07/03/2013**.

De la certificación de servicios y remuneraciones se constata que el trabajador laboró -en el año 2005- efectivamente desde el 15/03/2005 (fecha de ingreso a trabajar para la demandada) a 08/2005 (en el mes agosto completo 25 días), e incluso también trabajó 25 días de diciembre/2005 (conforme certificación de fs. 15) cumpliendo (5 meses y 15 días); luego en 2006 trabajó desde mayo/2006 (completo) a septiembre 2006 completo, totalizando (cinco meses); en año 2007 lo hizo desde abril 2007 (completo) al mes de septiembre 2007 (seis meses); en 2008 desde marzo 2008 hasta septiembre 2008 (siete meses); en el año 2009, lo hizo desde abril 2009 a septiembre 2009 (seis meses); en 2010

trabajó desde abril 2010 a septiembre 2010 (seis meses); en 2011 lo hizo desde abril 2011 a septiembre 2011 (seis meses); y finalmente en 2012 trabajó desde abril 2012 hasta septiembre 2012 (seis meses). En la temporada 2013 el actor no llegó a prestar servicios.

Así las cosas, surge que el cómputo en meses desde el 15 de marzo de 2005 (que ingresó a FOREIGN) hasta el mes de septiembre de 2012 (incluido), el trabajador completó 47 meses y 15 días (**47 meses** y medio) de trabajo entre la temporada 2005 y la temporada 2012 (ambas inclusive); lo que nos da un promedio aproximado de **6 meses por temporada** ( $47,5 / 8 \text{ años} = 5,9375$ ). Así lo declaro.

Ahora bien, por tratarse de cuestiones de hecho o nociones propias de la experiencia común (art. 33 del CPCCT, de aplicación supletoria), resulta conocido en nuestra provincia que **las temporadas de cosecha del citrus** pueden variar año a año por razones climáticas, y que -por lo general- el inicio de las temporadas del limón (para la exportación e industria, que es donde se incorpora el personal temporario) comienza en abril (o mayo) de cada año y se extiende hasta fines de agosto (o septiembre) de cada año. Lo determinante aquí, y que se corrobora con la prueba documental analizada en el párrafo anterior, es que el accionante trabajó con periodicidad y habitualidad prácticamente durante **06 meses en cada temporada** o ciclo de cosecha entre el **2005 y el 2012**.

En ese orden de ideas, en lo que respecta a los servicios efectivamente prestados por el trabajador en las temporadas que van desde el 16/05/98 (antigüedad reconocida al actor) hasta la temporada 2004, (pues los servicios de la temporada 2005 a 2012 ya se determinaron con anterioridad), **considero razonable interpretar y concluir (conforme los datos ya examinados y nociones de la experiencia común, sobre la duración de la temporada de citrus)**, que el actor trabajador trabajó un promedio de seis (6) meses en cada temporada de cosecha, entre los años 1998 al 2004 -inclusive-. Ello, lo reitero, en concordancia con los periodos que efectivamente trabajó en las temporadas comprendidas entre el año 2005 al año 2012, los que son corroborados por nociones sobre la experiencia común (Art. 33 CPCC), de lo que es la duración de la temporada del citrus en la provincia; lo que me permite concluir que entre el período de las temporadas del año 1998 a la temporada del período 2004 (7 años), el actor trabajó **42 meses** (a razón de 6 meses por año). Así lo declaro.

A mayor abundamiento, también dejo en claro que entre la documentación adjuntada por el actor, existen recibos que permite corroborar que efectivamente cumplió servicios en **todas las temporadas** desde el

**año 1998 hasta el 2004**; en CORPAP SRL, y luego fue transferido a FOREIGN, donde se le reconoció la antigüedad desde 16/5/1998.

VI.6. Por lo tanto, conforme lo dispuesto por el art. 18 de la LCT, el trabajador prestó servicios efectivos durante 89 meses y 15 días (89 meses y medio), durante la vigencia de la relación laboral y, por lo tanto, su antigüedad en el empleo fue de siete (7) años cinco (5) meses y quince días), lo que implica ocho **(8) años de antigüedad** (Confr. Arts. 18, 245 y Cctes. LCT). Así lo declaro.

## **VII. SEGUNDA CUESTION: Rubros e importes reclamados.**

VII.1. Pues bien, lo primero que se debe determinar es cual fue la mejor remuneración, normal y habitual del trabajador (en adelante: MRMNH), para calcular lo que sería la indemnización del Art. 245 LCT.

VII.2. El accionante, en su demanda, tomó el sueldo correspondiente al mes de junio de 2012: **\$6.463,91** (último año en que efectivamente prestó servicios). Sin embargo, la demandada negó categóricamente que corresponda tomar ese monto como la MRMNH, para calcular lo que sería la indemnización del Art. 245 LCT.

VII.3. No le asiste razón a la parte demandante en tomar como MRMNH el monto denunciado en su demanda (para el cálculo de la indemnización por antigüedad previstas en Art. 245 LCT), pues dicha suma, conforme la aplicación del principio de adquisición procesal (en virtud del cual los Jueces debemos valorar la prueba incorporada al proceso por los litigantes y decidir en base a ella -con independencia de a quien favorezca se observa) en la certificación de servicios y remuneraciones que trajo al proceso, que aquella no reúne el carácter de normal y habitual, ya que se advierte que en ese ciclo trabajado percibió diferentes montos (remuneración variable). Por lo tanto, aquella suma no puede ser considerada para componer la base a los fines del cálculo de la indemnización, conforme las disposiciones del art. 245 de la LCT. Así lo declaro.

En relación a este tema, se ha considerado que los elementos obrantes en la causa: ***“deberán ser analizados conforme el principio de adquisición procesal que hace posible que cualquiera sea la procedencia de las probanzas que obran en el expediente, su valoración por los jueces de mérito es siempre conducente, y pueden perjudicar o favorecer indistintamente a las partes, inclusive a aquella que la solicitó o la ofreció (conf. causas L. 66.583, sent. del 15/12/1998; L. 69.582, sentencia del 5/7/2000; Ac. 57.079, sent. del 21/11/1995; Ac. 55.593, sent. del 14/6/1996; Ac. 62.719, sent. del 1/12/1998). Como asimismo que***

***las partes no pueden pretender que el juzgador de origen al dictar su fallo prescinda de alguna de las pruebas, si consintieron su agregación en el juicio (conf. causa L. 58.074, sent. del 10/12/1996)...***”. En tal sentido se expidió, con criterio que comparto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al dictar sentencia el 17.09.08 en la causa “Verón, Jorge O. v. La Acrópoli S.A” (Cita Online: 70051026).

También nuestra Corte Suprema de Justicia local, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, ha considerado, con criterio que comparto, al dictar sentencia el 28.06.17 en la causa “**HERRERA MATIAS ESTEBAN Vs. PAUL TRADING S.A. Y OTRO S/ COBRO DE PESOS**” que: ***“La doctrina es actualmente pacífica en el sentido que el juzgador debe valorar la totalidad de las pruebas practicadas y basarse en todas ellas para dictar sentencia, con independencia del efecto que cada prueba conlleve -en sentido positivo o negativo, beneficioso o perjudicial- para las pretensiones de la parte que en su caso la haya propuesto, siendo perfectamente posible, incluso, que el convencimiento del juzgador acerca de las alegaciones de una de las partes se alcance mediante una prueba propuesta por la otra. Y ello porque las pruebas aportadas al proceso se desentienden de su procedencia y se incorporan a éste. En definitiva, el principio de adquisición procesal obliga a ponderar todas las pruebas producidas, ya a favor, ya en contra de cualquiera de las partes, con independencia incluso de la voluntad o interés de la parte cuando las aportó. En otros términos, los resultados de la actividad procesal son comunes para las partes y se consiguen para el proceso, por lo que las pruebas practicadas son del proceso y están destinadas al juez, quien debe utilizarlas prescindiendo de quién las haya aportado, pudiendo valerse de ellas para fundar su decisión estimatoria o desestimatoria de la pretensión esgrimida.- DRES.: GANDUR - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO)”***.

Consiguientemente de lo anterior, se constata en la certificación de servicios y remuneraciones agregada a la causa que al actor se le abonó **remuneraciones variables**, por lo que, adhiriendo a la Jurisprudencia del Máximo Tribunal Provincial -que en esencia comparto- se ha dicho que **para fijar el sueldo base a los fines del cálculo de la indemnización del art. 245 LCT deberá tomarse el promedio de las remuneraciones del último año percibidas por el trabajador, por cuanto con la reforma introducida por la Ley N° 21.297 se modifica sustancialmente el concepto de remuneración base para el cálculo de la indemnización por antigüedad, y ahora no se trata exclusivamente de la**

**remuneración mensual “mejor” sino que, además, simultáneamente sea “normal” y “habitual”.**

En efecto, el Tribunal Címero Provincial ya se ha expedido sobre este mismo tema en reiterados pronunciamientos -que, insisto, comparto-, en donde categóricamente ha dicho en relación a las remuneraciones variables y el método de cálculo de la base para determinar la indemnización del art. 245 LCT, que: *“...Corresponde recordar que esta Corte ha indicado en reiterados fallos que para fijar el sueldo base a los fines del cálculo de las indemnizaciones del art. 245 LCT deberá tomarse el promedio de las remuneraciones del último año, por cuanto con la reforma introducida por la Ley N° 21.297 se modifica sustancialmente el concepto de remuneración base para el cálculo de la indemnización por antigüedad, y ahora no se trata exclusivamente de la remuneración mensual “mejor” sino que, además, simultáneamente sea “normal” y “habitual”. Resulta oportuno señalar que la metodología de promediar, en primer lugar, no es extraña al sistema orgánico que conforma la LCT, pues éste ha sido adoptado expresamente por el legislador en sus arts. 155 inc. c, 208 y 245; y, en segundo lugar, posibilita una asimilación equitativa al concepto normativo de “mejor remuneración mensual, normal y habitual” cuando se trata de tareas retribuidas con remuneraciones variables, pues no perjudica al trabajador con una remuneración inferior -recuérdese que la ley modula lo cuantitativo “mejor” con los caracteres cualitativos de “normal” y “habitual”-, ni impone al empleador la obligación de pagar en base a una retribución que, si bien es la mejor, no concurre a su respecto el carácter de habitual”* (cfr. CJST, sentencia N° 1022 del 27/11/2013 “Chuquillampa Damaso vs. Martín Ana María s/ Despido”; sentencia N° 720 “Toscano Lidia de Jesús y otros vs. Expofrut S.A. s/ Cobros” del 23/8/2002; sentencia N° 1031 “Statkevich Alejandro Guillermo y otros vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. s/ Cobros” del 14/12/2004; sentencia N° 310 in re “Govino Roberto Pedro vs. Tecnomadera S.A. s/ Haberes impagos, etc.” del 05/10/1993, entre muchos otros)...” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - “JAIME SILVIA NORMA Vs. CENTRO DEL RIÑÓN Y DIALISIS S.A. (HOY DIAVERUM ARGENTINA S.A.) S/ INDEMNIZACIONES). Sentencia 1718 del 07/11/2018). Idem: CSJT: Sentencia n°.: 745 "Carrasco Vidoz Germán Eduardo vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. Y C. s/Cobro de pesos" del 29/07/2015.

Siguiendo con esa línea de razonamiento, también la CSJT ha determinado en la causa “QUINTANA JUAN MANUEL Y OTROS Vs. CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.S. S/ COBRO DE PESOS”, Nro. Sent: 290, Fecha Sentencia: 25/04/2007, que: **“También se expresó que al**

**efectuar la planilla para fijar el sueldo base a los fines del cálculo de las indemnizaciones del art. 245 LCT, deberá tomarse el promedio de las remuneraciones del último año, por cuanto ya con la reforma introducida por la ley 21.297 se modifica sustancialmente el concepto de remuneración base para el cálculo de la indemnización por antigüedad, y ahora no se trata exclusivamente de la remuneración mensual "mejor" sino que, además, simultáneamente sea "normal" y "habitual". Este criterio fue sostenido por este Tribunal en el caso de remuneraciones fijas como variables. Sobre este último supuesto se afirmó que: "Resulta oportuno señalar que la metodología de promediar, en primer lugar, no es extraña al sistema orgánico que conforma la LCT, pues el mismo ha sido adoptado expresamente por el legislador en sus artículos 155 inc. c y 208; y, en segundo lugar, posibilita una asimilación equitativa al concepto normativo de "mejor remuneración mensual, normal y habitual", cuando se trata de tareas retribuidas con remuneraciones variables, pues no perjudica al trabajador con una remuneración inferior -recuérdese que la ley modula lo cuantitativo "mejor" con los caracteres cualitativos de "normal" y "habitual"-, ni impone al empleador la obligación de pagar en base a una retribución que, si bien es la mejor, no concurre a su respecto el carácter de habitual... Por otra parte, este criterio equitativo, erigido expresamente por el legislador para otros supuestos, cuando se trata de actividades laborales remuneradas con retribuciones variables, como "principio general", propicia la aplicación concreta del principio expreso del derecho laboral consagrado por el art.11 de la L.C.T., según el cual la equidad constituye una directriz fundamental para la interpretación y aplicación de la Ley (cfr. Altamira Gigena, R.: "Ley de Contrato de Trabajo", t. I, pág.145)". La posición sostenida por la Cámara no se condice con la letra del artículo el cual expresamente enuncia los criterios de normalidad y habitualidad que, en el caso, son ignorados por el de mejor remuneración. De igual modo, como puedo observarse en los antecedentes citados este Tribunal ha hecho una interpretación armónica no solo el texto del art. 245 de la LCT sino también con el resto del cuerpo normativo".**

VII.4. Así las cosas, y siendo sustancialmente análogo este caso a lo resuelto por la Excma. Corte en este punto del debate, **considero que para calcular la base para liquidar la indemnización derivadas del despido sin causa, se deberá promediar las remuneraciones de la última temporada efectivamente trabajada por el actor (2012), las que se computarán teniendo presente las sumas que constan en la certificación de servicios y remuneraciones adjuntadas por el actor al proceso . El importe mensual**

(promedio) que se tomará como base de cálculo (para cálculo de la indemnización del Art. 245 CT), que surge de la planilla adjunta (que forma parte de la presente), alcanza a la **suma promedio de \$ 4.975,71**. Así lo declaro.

VII.5. Determinadas las cuestiones precedentes, corresponde determinar la cuantía y la procedencia de los rubros reclamados por el accionante, razón por la cual, se procederá al análisis de cada uno de ellos a los fines de su determinación.

**(i) INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD:** Lo primero que debo decir es que se constata en la causa que la demandada le abonó al accionante el 07/03/2013 la suma de **\$52.300** en concepto de “**indemnización por antigüedad**”, conforme surge del recibo adjuntado a la causa por el actor (foja 07). Al respecto, debo puntualmente destacar que en el recibo que se adjunta, el pago se imputó pura y exclusivamente al rubro “**indemnización por antigüedad**” (textual del recibo de fs. 7, cuyo original se encuentra en caja fuerte y tengo a la vista).

Teniendo presente el monto abonado por este concepto el cómputo de la antigüedad declarada en esta sentencia, las características de la relación de trabajo y la base de cálculo, se constata que no existen diferencias por este concepto a favor del accionante. Por lo tanto, se rechaza este rubro. Así lo declaro.

**(ii) INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PREAVISO:** Parto de la base que **NO se encuentra acreditado el pago documentado de este concepto**. Por tratarse de un despido directo sin causa, cabe hacer lugar a este rubro atento a lo dispuesto por los artículos 231 y 232 de la LCT, y para su cálculo deberá estarse a lo declarado en esta sentencia acerca de la antigüedad, las características de la relación laboral y la base de cálculo. **Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia.**

Antes de concluir, aclaro que se tomará en cuenta el criterio de la “**normalidad próxima**”, que también se aplica para los casos de remuneraciones variables; y que nos conduce al mismo importe calculado para el punto anterior (**\$4.975,71**), **ya que se están promediando los últimos 6 meses de la relación (temporada 2012)**. Así lo declaro

Al respecto, la jurisprudencia que comparto tiene dicho que: *El límite o tope determinado por el legislador referido a la indemnización por antigüedad (artículo 245 LCT), no es aplicable a la indemnización sustitutiva de preaviso; así lo entiende calificada doctrina y jurisprudencia Nacional. Tal como lo sostiene el Dr. Julio A. Grisolia en su libro “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, tomo II, página 1049, edición 2011, cuando dice: “La pauta establecida en el*

artículo 245, LCT es aplicable sólo para el cálculo de la indemnización por despido y el SAC (ley 23.041). Para el cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio de la “normalidad próxima”, noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado, y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante el lapso del preaviso omitido. Cuando el trabajador es retribuido con rubros variables, **no hay modo de determinar exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo tomar el período del semestre**. Si en ese lapso existe un mes de retribución mayor que los demás, no existen motivos para suponer que el dependiente ganaría la misma suma durante el preaviso, pero tampoco los hay para pensar que ganaría una inferior, lo que torna procedente la aplicación del promedio mencionado” (Sala 4 31/8/2010, “Espeche, Hipólito Armando vs. Dunlop Argentina S.A.”).” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - CASADO JORGE ENRIQUE Vs. VICENTE TRAPANI S.A. S/ COBRO DE PESOS - Nro. Sent: 654 Fecha Sentencia 05/09/2011)

**(iii) SAC S/PREAVISO:** Con respecto a la incidencia del SAC sobre el preaviso, debe estarse a lo establecido por la CSJT en su fallo “Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani” -sent. nro. 107 del 07.03.12- sobre el modo de su consideración.

Aquí también parto de la base que **NO se encuentra acreditado el pago documentado de este concepto**, por tratarse de un despido directo sin causa, cabe hacer lugar a este rubro y para su cálculo debe estarse a lo declarado en esta sentencia acerca de la antigüedad, las características de la relación laboral y la base de cálculo, cabe hacer lugar al pago de este rubro en base a su incidencia sobre el preaviso declarado admitido. Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia. Así lo declaro. Así lo declaro.

### **VIII. TERCERA CUESTIÓN: A) INTERESES.**

Teniendo en cuenta lo resuelto a las cuestiones precedentes y lo peticionado por la actora en su demanda, corresponde el tratamiento de los intereses a fin de ser considerado para el cálculo de los importes reclamados (en la medida que prosperan en cada caso), como también para el cálculo de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Así las cosas, habrá que tener presente la Doctrina Legal sentada por nuestra C.S.J.T. en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” donde se ratifica la decisión del Alto Tribunal de abandonar su anterior doctrina sobre la



aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. **CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, n° 324 del 15/04/2015**, entre otras) y en consideración a que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, se expresó lo siguiente: *"En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago"*.

Siguiendo esas líneas directrices, este sentenciante considera que resulta razonable -en el caso de autos- la aplicación de la Tasa Activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días, del Banco de la Nación Argentina, conforme las circunstancias existentes al momento de este pronunciamiento, y lo dispuesto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En concreto, esto implica que los intereses a aplicar para la deuda reconocida en la presente sentencia (con las distinciones que haré en el párrafo siguiente), serán -insisto- los previstos por la Tasa Activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Así lo declaro.

Finalmente, me parece importante establecer -y distinguir- dos cuestiones que se pueden presentar, relativas a la aplicación de los intereses sobre la deuda reconocida en la presente resolución, a saber:

En primer lugar, y con el objetivo de asegurar el cumplimiento puntual -en tiempo y forma- de la condena de sentencia, se establece que la deuda calculada (deuda consolidada) en "la planilla de condena" (que incluye capital e intereses hasta el 28/02/2023), deberá ser cumplida dentro del plazo de 10 días de intimado el cumplimiento de la sentencia (Confr. trámite previsto por los Arts. 145, 146 y Ctes. CPL). Y para el supuesto que la parte condenada no cumpliera con el pago del monto total sentenciado, dentro del plazo concedido, se le deberá aplicar un interés moratorio sobre el total de la deuda consolidada y liquidada en la presente sentencia (capital e intereses - confr. Art. 770 inc. "C" del C.C.y.C de la Nación); y dichos intereses correrán desde la fecha de la mora (en cumplir la sentencia), esto es, desde el vencimiento del plazo otorgado para cancelar el importe total de la sentencia; y en adelante y hasta el efectivo e íntegro pago; se

tendrá siempre en consideración los intereses de *la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos a 30 días vencida, que se dejan establecidos en el presente pronunciamiento.*

En el caso que el deudor cumpliera con el pago (en tiempo y forma, y sin caer en mora en el pago respecto del pago de la sentencia; esto es, del importe de la liquidación judicial practicada en la planilla anexa a la presente), solamente se deberán calcular los intereses devengados desde que cada suma es debida (conforme directrices de los Arts. 128, 255 bis y Cctes. de la LCT), hasta la fecha del total, efectivo e íntegro pago de la deuda. Es decir, en este caso, **no se capitalizarán los intereses antes mencionados** (los de la liquidación judicial que se practica en la presente, Confr. Art. 770 inc. “C” del C.C.y.C de la Nación), sino que se deberá calcular intereses sobre el “capital” de cada condena (y no sobre la deuda consolidada y liquidada en la presente), los que se computaran sobre los montos/rubros condenados, desde que cada suma es debida (conforme las previsiones de la LCT y normas complementarias), hasta el total y efectivo pago; y siempre -lo reitero- tomando en consideración los intereses de *la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos a 30 días vencida, que se dejan establecidos en el presente pronunciamiento.* Así lo declaro.

En virtud de haberse declarado que se aplique la tasa activa -y no la pasiva- conforme lo peticionó la actora en su demanda, deviene abstracto el planteo subsidiario de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23928, modificados por los arts. 4 de la ley 25561 y art. 5 del decreto nro. 214/02 que prohíbe la indexación de los créditos. Así lo declaro.

En virtud de lo considerado en forma precedente, se practica la siguiente:

**B) PLANILLA (Liquidación Judicial - confr. art 770**

**CCyC de la Nación)**

Nombre	Flores Alberto Fabián
Fecha Ingreso	16/05/1998
Fecha Egreso	07/03/2013
Antigüedad Indemnización	8 años

**Base Remuneratoria**

Periodo	Remuneración
04/2012	\$ 2.649,74
05/2012	\$ 6.256,43
06/2012	\$ 6.463,91
07/2012	\$ 5.850,99
08/2012	\$ 5.912,15
09/2012	\$ 2.541,06
Total	\$ 29.674,28

**Sueldo Promedio**                      \$ 4.945,71

### Cálculo Capital e Intereses de Rubros Condenados

<u>Rubro 1:</u> Indemnización p/preaviso	\$ 9.891,42
<u>\$4945,71 x 2 =</u>	

Rubro 2: Sac s/preaviso	\$ 824,29
$\$9891,42 / 12 =$	

Total Rubros en \$ al 07/03/2013	\$ 10.715,71
----------------------------------	--------------

Intereses Tasa Activa BNA desde 07/03/2013 al 28/02/2023	367,62%	\$ 39.393,07
--	---------	--------------

Total Rubros en \$ al 28/02/2023	\$ 50.108,78
----------------------------------	--------------

**C) COSTAS:**

En forma previa, cabe señalar que el art. 113 del CPCCT, prevé que: *“En toda clase de juicio, los funcionarios judiciales, los tutores, curadores, **abogados**, procuradores y mandatarios **que ocasionaran costas por su impericia, negligencia o mala fe serán personalmente responsables de ellas. La condenación será especialmente pronunciada por el juez o tribunal, haciendo mérito de las circunstancias que la motivaren”***.

En concordancia con aquella norma, la doctrina ha sostenido que la obligación primordial del abogado es impeler el procedimiento con un doble carácter: ético y profesional; el primero, atañe a la dignidad del letrado, y el segundo, a la responsabilidad civil que deriva de las omisiones, negligencias y faltas técnicas en que podría incurrir en el desempeño de su labor. Lo expuesto se relaciona directa o indirectamente con las obligaciones legales y éticas del abogado. Incorre en culpa y es responsable el abogado que demuestra, en el curso del procedimiento, falta grave de idoneidad en la redacción de los escritos constitutivos y posteriores; es decir, en la conducción de toda la causa (Bourguignon Marcelo y Peral Juan Carlos, Directores, Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, concordado, comentado y anotado, Tomo I -A, Libros Modernos, ed. 2012, pag. 452).

Teniendo presente lo anterior, del análisis de la causa, se desprende que la demanda solo prosperó tan solo por un 18,27% y ello se debe a que la representación letrada de la parte actora **computó la antigüedad del actor de una forma contraria a derecho. Es decir: cometiendo lo que sería un error inexcusable sobre el derecho, que tiene obligación de conocer por su condición de profesional de la abogacía.**

Como se observa del escrito de demanda -realizada por el letrado Medina- se desprende que invocó que la accionada se dedica a la actividad agraria, fundamentalmente, limonera; a foja 40 indicó que el accionante en el 2013 fue despedido poco después de que el actor había juntado la documentación para trabajar en esa “temporada”. Asimismo, en el segundo párrafo de aquella foja, expresamente, el apoderado del actor señaló que el trabajador: “**posee una antigüedad de 15 años** (desde su real ingreso el 16/05/1998 hasta su despido en fecha 07/03/2013)...como **empleado temporario**”. Esto último fue reproducido en la planilla de foja 48, donde el letrado colocó como fecha de ingreso del actor para “Fecha de Ingreso según FOREIN SRL: Alta -15/03/2005, con reconocimiento de antigüedad al 16/05/1998. Fecha de Egreso: Despido (FOREIN SRL) - 07/03/2013. Despido SIN CAUSA. Período Real de relación laboral: 14 años 10 meses - 15 AÑOS. CATEGORIA: EMBALADOR...TRABAJADOR PERMANENTE DISCONTINUO- Leyes aplicables LEY 26.727 y LEY 20744”. Luego, se constata que bajo el título “A) RUBROS RECLAMADOS”, el apoderado del actor multiplicó la base que consideró como MRMNH del actor - **\$6463,91- por 15 (años de antigüedad), obteniendo por resultado la suma de \$96.958,65**, que es el montó que reclamó, en concreto, la parte actora, a través de su apoderado.

Ahora bien, teniendo presente lo considerado al tratar la PRIMERA CUESTION, **en relación a cómo debe computarse la antigüedad de los “trabajadores temporarios”, resulta inexcusable, conforme el art. 18 de la LCT** (el que establece que: “*Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador*”), que aquel debía ser interpretado en armonía con el Art. 245 de la LCT; sin hacer una lectura y aplicación directa, exclusiva y excluyente de éste último (cual si se tratara de un trabajador vinculado a un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y de prestaciones continuas); error este, que -a mi modo de ver es grave e inexcusable-, configurando un supuesto de negligencia en el ejercicio del mandato, que ha sido determinante para el rechazo del rubro reclamado; y en definitiva, para la suerte de la demanda (que solo prosperó por un 18,27%).

Dicho en otras palabras, fue el error inexcusable del profesional (como asesor del trabajador), en el modo de calcular la antigüedad del actor, lo que motivó el rechazo del rubro más importante de la demanda; sellando la suerte adversa del reclamo; al punto tal, que hoy el trabajador -en el supuesto de **no**

imponerse las costas como se está decidiendo en este punto- **adeudaría más en concepto de costas** (incluso a su propio abogado), que lo que es el **importe total** que prosperó como crédito indemnizatorio. En concreto, su demanda prospera por la suma de **\$50.108,78**; y estaría adeudando costas por **\$ 124.000** (80% de \$155.000) en favor del abogado VICENTE BELLOMIO; y **\$ 155.000** a su abogado (por el principal), y más **\$ 15.500** por el incidente (donde resultó vencido, con condena de costas firme); y ello, sin perjuicio de la condena en costa (también firme), de la incidencia donde resultó vencedora la Dra. CORAI.

En definitiva, considero que constituye un error de derecho inexcusable de parte del letrado Medina haber expuesto en la demanda - y en la planilla- que **la antigüedad de su representado era de 15 años** (completos, calculando años calendario y no el período efectivamente trabajado); es decir, por haber efectuado el cálculo y el reclamo jurídico y numérico en base a ello, puesto que en el caso del trabajador de temporada, la antigüedad se computa conforme lo dispuesto en el art. 18 de la LCT (períodos efectivamente trabajados), y las consideraciones sobre ello fueron expuestas en el pto. VI.4. de esta sentencia, a los que me remito en honor a la brevedad, pero resaltando que constituyen nociones de derecho hartamente conocidas por existir doctrina legal de nuestra CSJT del año 2005, y abundante jurisprudencia y doctrina local y nacional en la materia.

Desde antaño la jurisprudencia y la doctrina se han expedido en el sentido de que en el trabajo de temporada o cíclico, se computa la antigüedad teniendo presente los días efectivamente trabajados por el trabajador (art. 18 de la LCT), y no el año calendario. **Inclusive, es doctrina legal de nuestra CSJT "...En el trabajo de temporada, a los fines de establecer montos indemnizatorios derivados de causas legales, se computa como antigüedad el tiempo trabajado durante los períodos de actividad de la explotación. "A los efectos de la indemnización por antigüedad, en el trabajo de temporada previsto en el art. 96 de la ley de contrato de trabajo, se computan únicamente los períodos de trabajo realmente prestados en cada una de las temporadas, que se sumarán, con conclusión de los tramos no trabajados" (C.Trab. Paraná 19/2/80. L.L. Z, 981-24-266)" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - OJEDA VDA. DE ORELLANA CELIA ROSA Vs. FINCA LA CRUZ Y/O OTRA S/ ART.212 L.C.T. Nro. Sent: 567 Fecha Sentencia 30/07/1997)**

En igual sentido, el Címero Tribunal Provincial también dijo: **"...Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que establece la antigüedad de los trabajadores sin tener en cuenta que los mismos estuvieron ligados por un contrato de trabajo de temporada".** (DRES.: DATO - GOANE - GANDUR" (Sala

Laboral y Contencioso Administrativo, “PEREA PABLO JOSE Y OTRO Vs. S.A. SER ARRENDAMIENTO INGENIO ÑUÑORCO S/ COBRO DE INDEMNIZACION ” **sentencia 645 del 11/08/2005**”).

Además, a modo de ejemplo, podemos citar los siguientes fallos:

1) “en el trabajo de temporada, a los efectos de establecer el monto de las indemnizaciones derivadas del despido, se computa como antigüedad el tiempo trabajado durante los periodos de actividad de la explotación” ( **CNAT en pleno, 13-5-59, plenario 50, autos “Bonanata Gorizia E c/ Nestlé SA”, d.t. XIX , p.383**).

2) “...en el trabajo de temporada, se computa como antigüedad el tiempo trabajado durante los periodos de actividad de la explotación, y que, a los efectos de la indemnización por antigüedad, en el trabajo de temporada previsto en el art. 96 de la ley de contrato de trabajo, se tienen en cuenta únicamente los periodos de trabajo realmente prestados en cada una de las temporadas”. (CSJT, Sentencia N°: 567, 30/07/1997, “Ojeda Vda. De Orellana Celia Rosa Vs. Finca La Cruz Y/O Otra S/Art. 212 LCT).

3) “El presente rubro- indemnización por antigüedad- será determinado de conformidad a lo dispuesto por el art. 245 de la L.C.T. en planilla que integrará la presente sentencia, teniendo en cuenta lo prescripto por el art. 18 de la L.C.T., computándose como tiempo de servicio el efectivamente trabajado por cada uno de los actores desde el comienzo de la vinculación con la demandada hasta su egreso, exclusivamente durante los ciclos activos de temporada. DRAS.: CASTILLO - TEJEDA.” (CAMARA DEL TRABAJO - Sala 1, “SANTANA HECTOR DANIEL Y OTROS Vs. TIPA S.R.L Y OTRO S/ COBRO DE PESOS”, Nro. Sent: 129 Fecha Sentencia 20/12/2010).

4) “Para determinar la antigüedad del trabajador de temporada- a todos los efectos- corresponde acudir a la solución que brinda el. 18 de la LCT, el cual en su actual redacción debe interpretarse en el sentido de la doctrina del plenario 50 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había concluido que, en el trabajo de temporada, a los efectos de establecer el monto de las indemnizaciones derivadas del despido, se computa como antigüedad el tiempo trabajado durante los periodos de actividad de la explotación ( **CNAT en pleno, 13-5-59, plenario 50, autos “Bonanata Gorizia E c/ Nestlé SA”, d.t. XIX , p. 383**). Es decir, se deben sumar los meses comprendidos en los distintos ciclos o temporadas trabajados, quedando impedido que se equipare un ciclo o temporada a un año de antigüedad. DRES.: CASTILLO - AVILA CARVAJAL” (CAMARA DEL

TRABAJO - Sala 4, "MUSTAFA JULIO CESAR Vs. CITRUSVIL S.A. S/ COBRO DE PESOS", sentencia nro. 11 del 11/02/2022).

Por lo tanto, el letrado -actuando con la debida diligencia- **no podía desconocer cómo era el cálculo de la antigüedad para reclamar el pago de la indemnización** por antigüedad del trabajador de temporada (Confr. Art. 18, 245 y Cctes. LCT), como era el caso de su representado. Competía a él, como profesional del derecho y responsabilidad profesional en el ejercicio de la abogacía, saber la normativa aplicable en concordancia con el criterio jurisprudencial y doctrinario pacífico y abundante en el tema bajo análisis.

Así, la suerte del litigio dependió exclusivamente del error inexcusable del letrado en computar la antigüedad del Sr. Flores.

Entiendo que el letrado apoderado del actor es quien posee los conocimientos técnicos jurídicos para llevar adelante el proceso y debía conocer los requisitos esenciales para la procedencia de los petitorios, en definitiva, la actuación judicial de la parte no puede ser ajena a quien tiene la dirección letrada, lo **cual hace pasible al profesional de una sanción**, en forma independiente o juntamente con su cliente (conf. Fassi- Yañez, "Código Procesal Comentado", t.1, p. 326).

Por ello, **considero que las costas del proceso que recaigan en cabeza del actor, deberán ser soportadas -en la totalidad del porcentaje que debería soportar el actor parcialmente vencido- por el letrado apoderado Franco G. Medina, conforme art. 113 del CPCCT, de aplicación supletoria.** Así lo declaro.

Antes de concluir, me parece importante citar que la jurisprudencia que comparto tiene dicho que: "...Cabe señalar que **la imposición de costas al abogado se funda en criterios subjetivos de imputabilidad**; es decir, que debe mediar **culpa y esa culpa debe surgir de las propias constancias de la causa y ser determinante del resultado adverso para el representado, como ocurre en el caso de autos.** En efecto, del análisis del expediente surge que la responsabilidad por las resultas del fallo recae sobre el profesional. Además, si bien es cierto que el abogado asume con su cliente una relación de medios y no de resultados, para dar efectivo cumplimiento existe un patrón de comportamiento que visualiza la corrección de sus actos y el empeño puesto de manifiesto. Es deber del abogado poner todos los medios a su alcance y obrar con prudencia, discreción y diligencia. No obstante, vale insistir con ello, la obligación del abogado es de medios y nunca de resultado. Sin embargo, del análisis de las constancias de autos surge que el letrado incurrió en omisiones que incidieron directamente en el resultado

*negativo del juicio, conduciendo indefectiblemente al rechazo de la demanda. Si bien no es su responsabilidad asegurar un resultado, **si lo es conducir el proceso con la idoneidad y diligencia suficiente, desarrollando una labora jurídica conducente al mejor resultado posible.***” (CAMARA DEL TRABAJO - Sala 4 - QUINTEROS JESUS LUIS Vs. SCHEDAN JAVIER ERNESTO Y/O FINCAS SAN PABLO LULES - MONTEGRANDE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - Nro. Expte: 269/07 - Nro. Sent: 260 Fecha Sentencia 28/12/2021).

Para finalizar, corresponde analizar ahora la imposición de cosas propiamente dicha, en atención a los resultados del proceso.

Así las cosas, y los fines de analizar las costas procesales que deberá soportar cada parte (en el caso del actor, el abogado MEDINA FRANCO G.), es necesario destacar que nuestra Corte Suprema local ha destacado que *“la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados”* (cfr. CSJT, sentencia n° 699, 23/8/2012, “Vega, Julio César vs. Arévalo, Ramón Martín s/ cobro de pesos”; sentencia n° 415, 7/6/2002, “López, Domingo Gabriel vs. NaculUadi s/ salarios impagos y otros”; sentencia n° 981, 20/11/2000, “Reyna, Julio Andrés vs. Ingeco SA s/ indemnización por accidente de trabajo”; sentencia n° 687, 7/9/1998, “Fernández, Ramón Alberto vs. Bagley SA s/ cobros”, entre otras). Asimismo, tiene dicho *“que el hecho objetivo previsto en la ley procesal para determinar el carácter de vencedor o vencido en un pleito se manifiesta, en particular, por la derrota de la posición procesal sostenida por la parte y por el correlativo progreso de la posición procesal de la contraria”* (CSJT, sentencia N° 1.298, 5/9/2017, “Pérez, Luis Fernando vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán - ART SA s/ cobro de pesos”).

En el caso que nos ocupa, se ha configurado un caso de **“vencimientos recíprocos”**, ya que el reclamo del actor ha progresado en los rubros de **preaviso y SAC s/preaviso; y no prosperó el rubro de la indemnización por antigüedad**. En consecuencia, y más allá de lo cuantitativo, entiendo que ha existido vencimiento recíproco, y las costas deberán ser soportadas de acuerdo a las siguientes proporciones: *la demandada deberá soportar el 80 % de sus propias costas más el 20% de las devengadas por la parte actora; y la parte actora (en rigor, el letrado MEDINA FRANCO G.) soportará el 80% de las devengadas por la demandada, y el 20% de las devengadas por el actor*. Así lo declaro.

**D) HONORARIOS:** Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. 2 de la ley 6.204.



A tales efectos y conforme surge de las constancias de autos se procederá a calcular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes teniendo en cuenta lo normado por el art. 50 inc. 2 del CPL.

En virtud de lo expuesto en párrafo anterior, se tomará como base el 60% del monto actualizado de la demanda, cuyo total asciende a la suma de pesos \$274.324 al 28/02/2023 (Valor demanda: \$58.664 - %actualización 367,62% - Intereses: \$215.660). Ese porcentaje fijado en forma discrecional y razonable (del 60%) está dentro de los parámetros previstos por el art. 50 inc. 2 CPL, arrojando una base regulatoria de pesos \$164.594.

Habiéndose determinado la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los arts. 14; 15, 38, 42, y concordantes de la ley N° 5480, corresponde regular los siguientes honorarios:

A. Por el proceso de conocimiento:

1) Al letrado FRANCO G. MEDINA por su actuación en la causa por la parte actora, en el doble carácter, en todas una etapa del proceso de conocimiento cumplida, la suma de \$ 13.606.- (base regulatoria x 16% más el 55% por el doble carácter / 3 x 1 etapa). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: “...*En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación*”, se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. En consecuencia le corresponde la suma de \$155.000 (valor de la consulta escrita más el 55% por el doble carácter).

2) Al letrado VICENTE BELLOMIO, por su actuación en la causa por la parte demandada, en el doble carácter, en una etapa del proceso de conocimiento cumplida, la suma de \$6.803.- (base regulatoria x 8% más el 55% por el doble carácter / 3 x 1 etapa). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: “...*En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación*”, se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. En consecuencia le corresponde la suma de \$155.000 (valor de la consulta escrita más el 55% por el doble carácter).

3) Al letrado EZEQUIEL GIUDICE, quien se apersonó a fs.107, no corresponde regularle honorarios por cuanto el mismo solamente se apersonó, y no presentó actuaciones en la causa que ameriten su regulación, siendo su actuación “inoficiosa”, entendiendo por tal, aquellos trabajos que en nada sirven ni para impulsar el procedimiento, ni para defender eficazmente el ejercicio de los derechos, ni llegan a ilustrar al Juez de sentencia en la solución del caso. Consecuentemente, no corresponde regular honorarios.

B. Por el incidente de fs 109/110 (costas a la parte actora).

1) Al letrado FRANCO G. MEDINA, siendo perdedor en la incidencia y atento a la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en los autos Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/Ejecución Hipotecaria sentencia N° 1050 de fecha 01/08/2018, le corresponde la suma de \$15.500 (10% de la escala porcentual del art. 59 de la ley arancelaria s/ consulta escrita más el 55% por el doble carácter). En el caso, no corresponde aplicar el mínimo legal también en el incidente, por cuanto el letrado ya tiene garantizado dicho mínimo, por la regulación en el principal.

2) A la letrada GRACIELA CORAI, siendo ganador en la incidencia y atento a la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en los autos Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/Ejecución Hipotecaria sentencia N° 1050 de fecha 01/08/2018, le corresponde la suma de \$23.250 (15% de la escala porcentual del art. 59 de la ley arancelaria s/ consulta escrita más el 55% por el doble carácter). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: “...*En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación*”, se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. En consecuencia le corresponde la suma de \$155.000 (valor de la consulta escrita más el 55% por el doble carácter). Se aclara que la letrada GRACIELA CORAI no ha tenido otra regulación en el presente proceso, que le garantice el mínimo legal del Art. 38 Ley 5480, razón por la cual, a la misma sí le corresponde dicha regulación mínima (\$155.000), teniendo en cuenta el doble carácter en el que actuó la profesional.

Por ello,

**RESUELVO:**

**I. ADMITIR PARCIALEMENTE** la demanda promovida por **FABIAN FLORES ALBERTO, DNI N° 23.826.703**, con domicilio en calle Aniceto de La Torre nro. 1.100, El Manantial, Tucumán, en contra de **FOREIN SRL, CUIT 30-70861826-4**, con domicilio calle Bernabé Aráoz nro. 282, de esta ciudad de Tucumán. En consecuencia, se condena a ésta al pago total de la suma de **\$50.108,78 (PESOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS)** en concepto de (i) indemnización sustitutiva de preaviso y (ii) SAC s/preaviso, conforme lo considerado, suma que deberá hacerse efectiva dentro de los 10 días de ejecutoriada la presente, mediante depósito bancario en una cuenta a la orden del éste juzgado, bajo apercibimiento de ley. Todo ello, conforme lo meritado.

**II. ABSOLVER** a la demandada del pago del rubro (i) indemnización por antigüedad, conforme lo considerado.

**III. COSTAS:** Conforme lo considerado.

**III. REGULAR HONORARIOS:** A. Por el proceso de conocimiento: Al letrado FRANCO G. MEDINA la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil); al letrado VICENTE BELLOMIO, la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil), conforme a lo considerado. B. Por el incidente de fs. 109/110 (costas a la parte actora): Al letrado FRANCO G. MEDINA, la suma de \$15.500 (pesos quince mil quinientos); y a la letrada GRACIELA B. CORAI, la suma de \$155.000 (pesos ciento cincuenta y cinco mil), conforme a lo considerado.

**IV. PRACTIQUESE PLANILLA FISCAL**, y notifíquese para la reposición de la misma, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.

**REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.**